

Comentario

Enrique Valencia

1

5

3

En cualquier lugar en que se verifiquen, las elecciones representan un momento clave, a pesar de los innegables elementos coyunturales que las constituyen. Descubren muchos aspectos de la situación de una sociedad en un momento determinado: la naturaleza del sistema político; la calidad política de las organizaciones partidarias y su representatividad, los contenidos ideológicos de los grupos sociales y su influencia en las prácticas políticas; el impacto que en los movimientos y en la participación política tienen las coyunturas históricas y, sobre todo, en el carácter de la estructura del poder y de los procesos y mecanismos de legitimación. Estos aspectos, por lo tanto, deberían estar

presentes en el análisis del sistema electoral de un país y de la coyuntura misma de las elecciones en un momento determinado.

Las recientes elecciones en Nicaragua nos muestran cómo las prácticas electorales pueden sufrir profundas alteraciones debido a las crisis y a los cambios de contexto en ámbitos que rebasan lo nacional. Los resultados de la "primera vuelta" en las elecciones peruanas, con una distribución sobre preferencias electorales completamente inesperada, constituyen también un buen ejemplo. Agreguemos, para ampliar la ilustración, lo sucedido en la elección general de México (1988) y en las recientes elecciones municipales de Venezuela.

Si nos atenemos a estos ejemplos podríamos hablar de una hipersensibilidad del proceso electoral, alejado, por lo menos coyunturalmente, de lo que fueron los sistemas políticos tradicionales de América Latina, con sus lealtades cuasigenéticas de las afiliaciones partidarias. Creo que estos cambios son indicativos de “modernización” de los sistemas electorales y de las prácticas políticas, ahora más atentas a las situaciones sociales concretas que a los parámetros ideológicos, por lo menos al nivel del elector concreto; sistemas políticos relativamente consistentes y estables, con partidos fuertes, que son golpeados en la coyuntura electoral debido a la crisis (México) o países convulsionados como Colombia, en los que el sistema político institucional y sus mecanismos electorales se conservan y manifiestan con relativa efectividad.

Estos cambios de los vientos políticos reflejados en las prácticas electorales y que resultan de claro valor para los partidos, en relación con el sistema político institucional ya no presentan las mismas ventajas. Los cambios cíclicos (dictadura-democracia) que alguna vez caracterizaron a los sistemas políticos latinoamericanos, parecen haber dado paso a prácticas políticas más inmediatistas ancladas en los problemas del desarrollo económico y de las expectativas sobre los niveles de vida y de orientación y contenidos del pacto social que las unen en la práctica.

No se trata de sostener la tesis de la desaparición de los partidos, sino de subrayar la transformación de las ideologías sociales y con ella la de las lealtades partidarias.

Ante este fenómeno, que puede ser clave para el desarrollo de la democracia en el subcontinente, uno puede preguntarse: ¿qué tan coyunturales son estas

prácticas que aparentemente han elevado el carácter plural y autónomo de las decisiones y de las participaciones electorales?, ¿los fenómenos electorales que estamos contemplando no tienen otro sentido que el de comportamientos culturales?, ¿esos fenómenos tienen una fuerza real suficiente como para inducir la democratización de la sociedad y del sistema político, o sólo son movimientos de protesta ante procesos de crisis que devastan formas y niveles de vida aparentemente conquistadas? Finalmente, ¿nuestros sistemas políticos institucionales, están realmente capacitados para incorporar y procesar estos cambios hacia formas políticas más participativas, o sólo estamos frente a una fase del largo proceso de transformaciones del sistema político en América Latina, que exprese alternativas diferentes del pacto social?

Si tuviera que destacar un factor común al comportamiento político-electoral reciente en los países andinos, sería sin duda el de la crisis social y económica debida al fracaso del modelo de desarrollo y al endeudamiento externo (su expresión más concreta), el que aparecería con mayor peso. No obstante, la crisis ha operado de acuerdo con ciertas circunstancias políticas, sociales y económicas nacionales acumuladas en el pasado y según el tipo y grado de las contradicciones que introdujo en el sistema político y en las relaciones entre éste y el Estado.

En aquellos casos relativamente recientes –Venezuela y Ecuador– en que se configura un sistema político más plural y nuevo, la crisis ha deteriorado la imagen política de los partidos, pero no la ha devastado. La alternancia en el poder de los partidos, en términos de su oferta para paliar la crisis y proteger los niveles de vida, parece ser la regla que,



1
5
5



5

1
5
6

por el momento, solamente introduce inestabilidades episódicas, principalmente en la forma de protestas sociales. En algunos casos –Bolivia, Perú– en que las viejas organizaciones partidarias se han mostrado incapaces de enfrentar con cierto éxito la crisis y aun las nuevas formaciones políticas (casi siempre de izquierda) no han tenido un papel destacado, la destrucción de las alternativas partidarias ha sido enorme en el combate y se ha recurrido a la formación de bloques electorales, que para poder conformarse como factores políticos de poder, han debido renunciar a sus ideologías tradicionales y hacer propuestas de dudosa ortodoxia.

Colombia es un caso aparte. En este país la crisis económica ha sido de menor alcance y profundidad que en otros países de la región, debido a un manejo conservador de la economía. Sin embargo, no hay otro país en América Latina que presente una crisis más extensa y profunda del sistema político institucional y de sus rasgos históricos tradicionales. Lo sorprendente es que en Colombia, a pesar de la endémica violencia política característica del sistema, éste sigue siendo el factor fundamental de poder, de tal manera que el bipartidismo en realidad no ha visto en peligro su hegemonía.

Algunas hipótesis pudieran plantearse al respecto: el regionalismo como estructura histórica, que conformó lealtades y clientelas a jefes y caudillos (poderes privados), más que a las formaciones políticas, y que es un exclusivismo absolutista del sistema político, incapaz por lo tanto de incorporar a su acción institucional intereses más amplios que los de los grupos dominantes; el dominio hegemónico de los mecanismos que forman opinión; la ausencia de una alternativa partidaria real al sistema bipartidista. Todos estos factores, aún no superados a

pesar de la crisis de violencia, últimamente se han visto reforzados por aquellos provenientes de un proyecto de acumulación muy concentrado, que ha encontrado en sistemas paralelos e ilegales (el narcotráfico y el contrabando) formas alternativas de enriquecimiento, lo cual ha fortalecido y ampliado el sistema de poderes privados (los paramilitares).

A pesar de este cuadro, en Colombia siguen existiendo y se practican rituales electorales, todavía suficientemente fuertes como para impedir la formación de alternativas opositoras eficaces y la realización de reformas de fondo.

Por lo menos en el discurso, todos los países andinos, excepto Colombia, se reconocen parte integrante o afín de la Internacional Socialdemócrata. En algunos casos –Ecuador y Venezuela– sus presidentes son miembros destacados de la dirección. Pero en la práctica económica y social están comprometidos con la aplicación del modelo neoliberal, como sucede en toda América Latina.

La inestabilidad política que conlleva el peso de la deuda externa, junto con la crisis de los términos de intercambio y la limitación de las fuentes de financiamiento, han pauperizado a amplios sectores sociales y modificado –no sabemos todavía si de manera coyuntural o estructural– las preferencias electorales y las prácticas políticas.

Nuevos sistemas de alianzas (Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR y el partido de Hugo Banzer en Bolivia, el FREDEMO en Perú); disidencias episódicas en el seno de partidos tradicionales, como el conservador de Colombia; búsqueda de “modernizaciones” partidarias y lucha contra las formas de corrupción del clientelismo político, como en Acción Democrática en Venezuela, y abier-

tas asociaciones con partidos afines en el ámbito internacional y el intento de incorporación al sistema político legal de nuevas fuerzas, como la guerrilla, son algunas de las expresiones de esta crisis e inestabilidad política, que ha significado la pérdida de representación y legitimidad de los partidos.

En algunos casos como en Perú y en Colombia, la violencia política ha llenado el vacío dejado por el sistema institucional de partidos, así como el tráfico de enervantes ha ocupado los espacios dejados por la crisis económica.

Un fenómeno interesante, por lo menos en estos dos países, ha sido la vinculación entre el narcotráfico y la política. Unas veces como fuente de financiamiento, otras como fuente de protección y control armado, y unas veces más como poderes privados mercenarios, el poder de los narcotraficantes se ha convertido en una poderosa base de apoyo, sustentación o acción política. Además, el narcotráfico ha creado las condiciones propicias para la intervención militar extranjera—esencialmente norteamericana— que en la medida en que el tráfico de estupefacientes no pueda ser controlado y eventualmente derrotado por los gobiernos, se incrementará cuantitativa y cualitativamente. Y en la medida en que las ligas políticas del narcotráfico se mantengan, la lucha antinarcóticos tomará rasgos de lucha política, anticomunista en la medida en que los movimientos guerrilleros izquierdistas operen en países y regiones productoras y comercializadoras de estupefacientes.

En países como Colombia y Bolivia, el tema del narcotráfico es parte del discurso político actual y los narcotraficantes han pugnado por hacerlo inseparable para crear un frente de agitación que le conceda cierta legitimidad a una actividad que saben delictiva. Han explotado en

especial el asistencialismo social y las contradicciones del sistema frente a los niveles de vida. Las mismas medidas jurídicas establecidas en estos países para combatir el narcotráfico—como la extradición, la suspensión de garantías, etc.—, por su naturaleza se constituyen en argumentos políticos que intervienen en las prácticas electorales actuales.

El conjunto de factores señalados introduce elementos de desestabilización del sistema institucional y en todos los casos el fantasma militar está presente, tal vez con menor violencia en Ecuador y Venezuela. Difícilmente la institución militar se decidirá a tomar el poder en medio de la actual crisis. Sin embargo, ésta ha profundizado formas de coparticipación política de los militares y en cierta medida estamos frente a la militarización gradual del estado y la sociedad sin gobierno militar. Los límites de esta situación no están claros en el momento y quizás los militares prefieran actuar por intermedio de la oficialidad en retiro. En el panorama actual de las luchas electorales, en varios países andinos, los militares retirados encabezan grupos políticos, casi siempre externos y extraños al sistema político institucional. En todos los casos el discurso se refiere a la grave situación de crisis que viven esos países y a la necesidad de ofertas políticas alternativas que sean una respuesta efectiva a la misma.

En este rápido recuento de las circunstancias que condicionan las prácticas y los sistemas electorales, en general de los países de América Latina y en particular de los andinos, se hallan presentes nuevos factores y nuevos actores. No obstante, el eje central se halla en la *sui generis* concepción de la democracia que ha ido delineando la crisis, y es en este campo en donde las diferencias entre los sis-



temas políticos institucionales de los países andinos y latinoamericanos presentan respuestas diferentes y divergentes.

Los análisis realizados para cada uno de los países andinos, señalan los siguientes hechos significativos:

En Bolivia, a partir de 1980, se inaugura una nueva fase que se caracteriza por una mayor presencia de la sociedad en la vida política del país, anteriormente decidida y condicionada por los militares. Esa nueva fase que trata de responder al proceso de crisis (uno de los más intensos en la región) y ha presionado por una reforma del Estado y su modernización, si bien modificó el tradicional enfrentamiento político-militar, en la actualidad, y en el marco de la “nueva democracia”, se expresa como el enfrentamiento entre gobierno y sociedad.

La modernización en esta circunstancia, presentada como una “nueva histo-

ria” de valor universal, busca como efecto la desmovilización política. En el caso de Bolivia el énfasis puesto en esta nueva fase de participación política de democracia electoral, deja fuera, sin embargo, el cuestionamiento de los verdaderos centros de poder. En estas circunstancias la creación de una “nueva mayoría” de reciente lealtad al Estado y negadora de los símbolos histórico-tradicionales, trata de crear las bases políticas necesarias para sustentar el proyecto neoliberal.

Un nuevo pacto social consistente en la reducción de las demandas reivindicativas del movimiento popular, suprimiendo sus contenidos políticos (acentuación gremial corporativa del movimiento obrero), es el objetivo de la visión derechizante de la reforma del Estado y de la modernización económica y política.

El sistema político boliviano, desde esta perspectiva, enfrenta tres grandes

problemas: solución duradera a la crisis; institucionalización del narcotráfico, en la medida en que las alternativas impulsadas por Estados Unidos a la economía coquera (de mucha importancia económica y social en Bolivia) no sean efectivas o se retrasen demasiado; la legitimación de las posiciones políticas de la coalición del actual presidente Jaime Paz Zamora-Hugo Banzer y el deterioro y despolitización (¿circunstanciales?) del movimiento de izquierda, tradicionalmente fuerte y combativo en Bolivia.

En Ecuador la crisis ha originado una involución política, que produjo el tránsito de una socialdemocracia de contenido nacionalista y populista a una de corte neoliberal acorde al tono mundial, como la que representa el actual presidente Rodrigo Borja. En cierto sentido se trata de una “nueva derecha”, presentada como alternativa que contrasta con la “derecha bárbara” del anterior gobierno.

La respuesta de la socialdemocracia a la crisis social en forma de programas para combatir la “pobreza absoluta”, además de reconocer la dimensión brutal que adquiere la desigualdad en nuestros países, plantea una nueva forma de estratificación: por una parte la existencia de sectores modernos o susceptibles de modernización, por la otra, contingentes de pobres absolutos a quienes es necesario proteger asistencialmente para prevenir su subversión; una nueva forma de dualismo estructural en el marco de neoliberalismo.

La falta de una salida a la crisis social da lugar a una “cultura política lumpenizada o a una simple lumpenización”. Esto se advierte sobre todo en grandes centros urbanos en que la crisis social, por una parte, y la ausencia de alternativas políticas progresistas, por otra, conducen a la formación de movimientos

políticos de clientela que en la medida en que fallan para satisfacer demandas, se convierten en fuerzas anárquicas y mercenarias, como ha sucedido en Guayaquil.

Dentro de este cuadro, la posibilidad de un golpe militar —del que se ha hablado varias veces— presenta una legitimación negativa, ya que no corresponde a las circunstancias de crisis general del país, que hacen “disfuncional” el golpe para los propios militares.

La situación actual de Perú, una de las más críticas de América Latina, tanto por las circunstancias coyunturales como por los factores estructurales que han configurado su cuadro social, económico y cultural, plantea una serie de puntos de reflexión, por ello mismo complejos y distorsionados.

La crisis peruana ha amalgamado, como en ningún otro país, salvo Colombia, los problemas derivados de la depresión económica, la insurgencia guerrillera, el narcotráfico, la intervención de la institución militar, las presiones imperialistas y la política. Si se pone atención al actual movimiento político de Perú y a sus actuales prácticas electorales, es fácil constatar la interrelación de todos estos factores que bien sea por atención o por omisión, condicionan los programas y las acciones partidarias.

Frente a la crisis económica las alternativas son pocas y están polarizadas. El FREDEMO plantea planes de choque que sin duda habrán de profundizar la crisis social y con ello el deterioro de las bases políticas, lo que ya ocurrió en la primera vuelta de las elecciones generales; los otros agrupamientos políticos sólo atinan a proponer planes generales contradictorios entre los llamados electorales y los desafíos de cambio económico, evidentes para todos.

Nunca antes en América Latina había existido un movimiento político militar

como Sendero Luminoso, no tanto por sus planteamientos ideológicos y políticos, como por las tácticas que emplea; si nos atenemos a ellas, parecería que el objetivo es la destrucción del sistema institucional ya sea por el terror o por la eliminación física. En la estrategia de Sendero, el vacío de poder creado por la acción pasaría a ser ocupado por la organización política, argumento bastante imposible, ya que el vacío político no es necesariamente vacío de Estado.

Los riesgos de una acción como la de Sendero radican en los efectos que se producen en el comportamiento de otros niveles institucionales, principalmente en la institución militar. En Perú, en donde la "legitimidad negativa" del golpe militar está muy presente, los acontecimientos de la lucha contrainsurgente están reforzando la militarización de la sociedad y del Estado. "La lucha antisubversiva genera una concentración de fuerzas en la institución armada y no es contraria al antiestatalismo del FREDEMO", en cuanto este movimiento se pronuncia por un autoritarismo estatal sin intervención, lo que puede convertir la función gubernamental en una función policial.

La confusión política —reflejada en las urnas— en un país que presentaba el movimiento de izquierda legal más amplio y fuerte de América Latina, no sólo ha dado pie al deterioro de éste, sino también a la aparición de movimientos seudopopulistas y casi de corte mesiánico. La crisis del sistema político institucional es tan grande, que propicia la esperanza en un milagro para solucionar los problemas que genera. No es de extrañar que elementos religiosos y radicales se hayan incorporado a este juego de aspiraciones frustradas y desesperaciones, que no fueron satisfechas en la utopía del APRA.

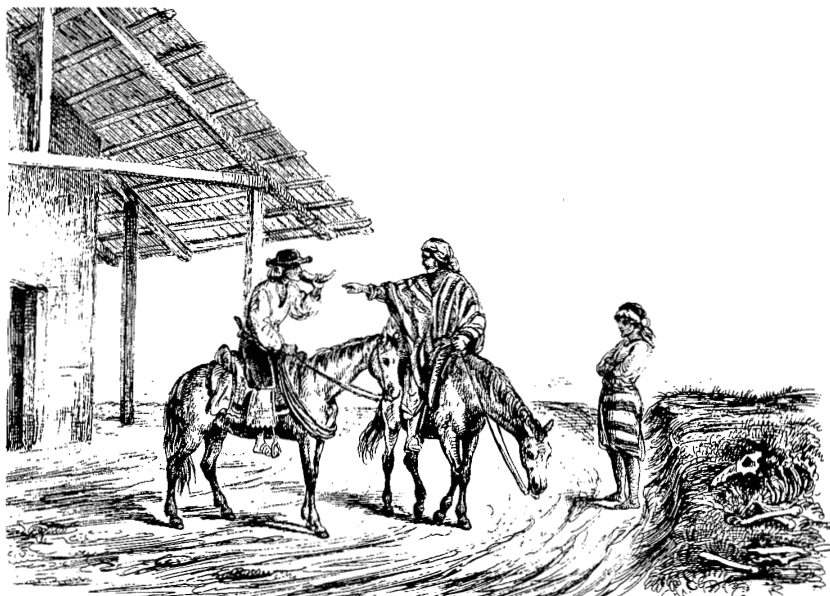
En Venezuela el sistema político, a veces alternativo entre los dos grandes

partidos —Acción Democrática y COPEI—, trajo largos años de estabilidad, reforzada por la pujante economía del país. Sin embargo, la crisis económica ha socavado el sistema, como lo prueban las asonadas sociales de Caracas y la derrota en las elecciones municipales del partido gobernante.

En algunos análisis se ha intentado explicar este extenso periodo de democracia venezolana, por "el carácter competitivo del sistema electoral", que habría permitido al país "continuidad, estabilidad y pluralidad partidarias". Ciertamente los procedimientos electorales "universales, directos, libres y efectivos", pueden ser "rasgos que garanticen el bipartidismo y lo legitimen". No obstante, nada dicen de diferencias sustantivas entre los partidos que hegemonizan el sistema y tienden a excluir otras fuerzas populares.

A pesar de las diferentes afiliaciones ideológicas entre el COPEI y Acción Democrática, los intereses que se han derivado de una economía pujante han creado y consolidado ese sistema de competitividad y alternancia. En realidad puede preguntarse cuáles son los espacios que el sistema competitivo electoral en Venezuela dejó a otras fuerzas. Las elecciones de mucho tiempo atrás muestran cómo las fuerzas de izquierda, principalmente representadas por el Movimiento al Socialismo (MAS), no han variado sustancialmente su posición electoral en todos estos años de estabilidad política.

La crisis —como hemos señalado— está devastando el "sistema electoral competitivo" de Venezuela. Puede constatarse un deslizamiento de Acción Democrática hacia la derecha, al unísono de la profundización del conflicto social y las acusaciones de corrupción. COPEI espera su oportunidad, sin levantar una propuesta



que pudiera ser indicativa de un nuevo proyecto social, económico y político.

La continuidad de la estabilidad y competitividad del sistema político venezolano, dependerá cada vez más de la capacidad de revitalizar el pacto social anterior a la crisis. Si ello no sucede, sobrevendrá la quiebra de la democracia y la aparición del autoritarismo, como ya se vio recientemente.

Colombia constituye, sin duda, el ejemplo más dramático y paradójico entre los países andinos. Crucificada por una violencia política endémica y acosada por la violencia del narcotráfico, ha mantenido una sorprendente estabilidad y crecimiento económicos, singulares en el panorama de la región. Desprestigiados los partidos tradicionales y el propio sistema institucional, tienen, no obstante, suficiente fuerza y poder para mantener el control político sin recurrir a

medidas abiertamente autoritarias que menoscaban la democracia formal.

Frente a este espectro de paradojas y problemas, el sistema bipartidista (el más viejo de América Latina) no presenta propuestas ni tiene proyectos ni líderes que pudieran transformar o reformar siquiera el sistema, a pesar de sus graves contradicciones. Más aún, no hay en el espectro político colombiano otra alternativa partidista válida, capaz de servir de contrapeso al sistema tradicional.

Sin duda la ingobernabilidad de la “democracia” colombiana, que en 40 años de convulsiones parece acercarse cada vez más a una crisis definitiva que no se produce, es correlativa a los vicios de este sistema político.

El profundo clientelismo que caracteriza a los partidos conservador y liberal —en realidad transformados en federaciones de clientelas— ha hecho de la ac-



tividad política colombiana un proceso desacreditado, al que se acude con desgano y por intereses crematísticos directos. Se verifica por ello una amplísima abstención electoral, sólo explicable por los defectos del registro de votantes, y por la aparición de candidaturas que se considerarían absolutamente espurias en cualquier sistema político bien estructurado. En estas condiciones, las elecciones colombianas se parecen más a una feria que a un acto cívico. De todo ello se aprovecha la democracia formal para sobrevivir.

Una tradición de “poderes privados” (regionales, locales y personales) ha sido la consecuencia casi natural de los rasgos esenciales del sistema, casi desde su aparición en el siglo pasado. En esa tradición se han ido articulando y cobijando nuevos poderes: en épocas recientes, primero el de los caciques políticos que realizaron la violencia interpartidista; después el de las organizaciones guerrilleras y últimamente el de los barones de la droga y el de los paramilitares.

El proceso de participación emprendido en distintos gobiernos y parcial-

mente logrado con la desmovilización del Movimiento 19 de Abril este año, ha querido ser una alternativa al exclusivismo político del sistema bipartidista. En este marco se logró la elección popular y directa de alcaldes municipales, que tenía por objetivo ampliar las bases de la participación ciudadana. No obstante, el sistema de poderes privados, ahora mezclado en una combinación diabólica de *vendetta* política, supresión de la oposición de izquierda y defensa de los intereses del narcotráfico, prácticamente ha clausurado las posibilidades que despertó la pacificación.

En mayo habrá elecciones presidenciales, después del asesinato de tres candidatos a la presidencia: uno liberal, otro de la izquierda legal y uno más ex comandante guerrillero. Como señalé, no debe haber sorpresas y alguno de los candidatos del bipartidismo —muy probablemente el liberal— será electo presidente del país. No hay ninguna señal de que el nuevo mandatario y el sistema estén empeñados y comprometidos en realizar los cambios profundos que Colombia requiere.